

COVRI

CONSEJO VENEZOLANO DE RELACIONES INTERNACIONALES (COVRI)

Pensamiento Independiente para la Acción Global

ELECCIONES PRESIDENCIALES Y POLÍTICA EXTERIOR DE COLOMBIA

MAYO, 2026



PRESENTACIÓN

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), que se encuentra próximo a cumplir 14 años de labor ininterrumpida, ha venido desarrollando a lo largo de su historia las tres tareas que son propias de un centro de pensamiento o laboratorio de ideas: analizar, evaluar y recomendar.

En este contexto, el COVRI se ha dedicado a realizar análisis internacionales y estratégicos con el máximo rigor posible, proporcionando conocimiento objetivo tanto a la sociedad venezolana como al lector extranjero interesado en una perspectiva venezolana sobre los grandes temas de la agenda global.

Nuestra labor tiene también un componente crítico y prescriptivo que nos distingue de un centro de investigación estrictamente académico. Desde una posición independiente pero comprometida con los intereses nacionales, nuestros informes se atreven a hacer prospectiva de oportunidades y amenazas, señalando carencias, identificando buenas prácticas comparadas, y apuntando posibles innovaciones que permitan una mejor inserción de Venezuela a nivel latinoamericano, hemisférico y global.

La presente publicación representa una nueva edición de nuestro análisis electoral colombiano —la primera fue producida en mayo de 2018, con motivo de la primera vuelta que llevó a Iván Duque a la Casa de Nariño— y se inscribe en el mismo esfuerzo de analizar y evaluar la dinámica electoral de “nuestro vecino interior”, Colombia, y los cambios que sus resultados pueden suponer para su política exterior en general y para las relaciones colombo-venezolanas en particular.

En 2026, el contexto es radicalmente distinto al de 2018. La región latinoamericana ha experimentado transformaciones profundas: el lanzamiento del “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, la operación de extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses, la instalación de un Gobierno interino en Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez y bajo el tutelaje de la Administración Trump, así como la reconfiguración del eje de poder en América Latina entre las nuevas derechas y las izquierdas latinoamericanas residuales de la “segunda marea roja” del Foro de São Paulo, constituyen el telón de fondo sobre el que se libra la contienda electoral colombiana de 2026.

Para Venezuela, el resultado de estas elecciones no es un asunto de política comparada: es, en sentido estricto, política propia, lo cual hace que nuestros ojos se posen atentos al desenlace electoral en Colombia.

Dr. Kenneth Ramírez

Presidente del COVRI

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
IVÁN CEPEDA	10
ABELARDO DE LA ESPRIELLA	14
PALOMA VALENCIA	18
CONSIDERACIONES FINALES	22
MATRIZ PROSPECTIVA DE LAS RELACIONES BILATERALES	24

INTRODUCCIÓN

Con motivo de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia que tiene lugar hoy 31 de mayo de 2026, el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) ha preparado el presente informe sobre las posiciones y propuestas en materia de política exterior de los tres candidatos presidenciales con opciones reales de competir en segunda vuelta: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Si bien el campo electoral incluye a otros aspirantes —como Sergio Fajardo y Claudia López—, el análisis demoscópico disponible en el momento de redacción de este informe justifica concentrar el análisis en los tres candidatos mencionados.

El informe del COVRI se articula en torno a tres ejes temáticos: 1) Post-conflicto, Paz Total y narcotráfico; 2) Política exterior en general, con énfasis en las relaciones con EEUU bajo la segunda Administración Trump, el multilateralismo, la institucionalidad de la Cancillería y el servicio exterior; y 3) La crisis de Venezuela y las relaciones bilaterales.

El escenario electoral: un país profundamente polarizado.

Las elecciones de 2026 se desarrollan en un clima de polarización que varios analistas colombianos describen como estructuralmente novedoso en la historia política del país. Para algunos, la aparición de un eje izquierda-derecha nítido es un fenómeno relativamente reciente, atribuible en gran medida a la irrupción de Gustavo Petro como candidato presidencial viable en 2018, el cual se consolidó con su llegada al poder en 2022. Mientras que para otros, el elemento más diferenciador de esta elección es tanto la agenda de seguridad —aunque esta ocupe el primer lugar en las preocupaciones ciudadanas—, como la cuestión del modelo de país: la fractura entre la “Colombia de los nadies” y la “Colombia de los siempre”.

Ese clima de polarización tiene proyección directa sobre la política exterior de Colombia. Los tres candidatos relevantes no representan simples variaciones de énfasis sobre una misma visión de inserción internacional, sino concepciones radicalmente distintas del lugar de Colombia en el Mundo: la autonomía estratégica de orientación multilateral y Sur-Sur de Cepeda, el plegamiento con EEUU y la internacional de la nueva derecha populista global de Alejandro de la Espriella, y el pragmatismo uribista con énfasis en diplomacia económica y cooperación hemisférica en materia de seguridad de Valencia. Estas diferencias tienen consecuencias concretas y verificables, especialmente para Venezuela.

El panorama demoscópico y sus límites interpretativos.

El análisis de las encuestas disponibles confirma la posición dominante de Cepeda en primera vuelta y la incertidumbre estructural de la segunda.

La encuesta AtlasIntel/Semana realizada entre el 18 y el 21 de mayo de 2026 —sobre una muestra de 4.531 encuestados con un margen de error de ± 1 punto porcentual— arrojó los siguientes resultados en votos válidos:

Candidato	Votos válidos	Votos totales
Iván Cepeda (Pacto Histórico)	38,7%	37,7%
Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria)	37,3%	36,3%
Paloma Valencia (Centro Democrático)	14,3%	13,9%

Fuente: Encuesta AtlasIntel/Semana, 18-21 de mayo de 2026 (n=4.531, ±1 p.p.).

Sin embargo, conviene calibrar estos datos con precaución, ya que las encuestadoras se han equivocado en Colombia en el pasado: en 2022, el ascenso meteórico de Rodolfo Hernández no fue anticipado con suficiente antelación por el grueso de los sondeos; en 2018, la competitividad final de Petro fue sistemáticamente subestimada.

Al combinar metodológicamente las cinco firmas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral (Invamer/Caracol, GAD3, AtlasIntel/Semana, Guarumo y CNC), y ponderarlas según su desempeño histórico en los eventos electorales de 2018, 2022 y la actual consulta de 2026, emerge un panorama algo distinto: Cepeda se ubica entre 38-40%, De la Espriella se posiciona en 24%, y Valencia en torno al 19%, con una brecha significativa respecto a los datos de AtlasIntel/Semana para los candidatos de derecha. Esta divergencia entre encuestadoras —que en el caso de De la Espriella alcanza hasta 13 puntos porcentuales— es en sí misma el argumento más sólido para la cautela interpretativa.

En relación a la segunda vuelta, el escenario más probable según las encuestas —Cepeda contra De la Espriella— arroja resultados extraordinariamente ajustados. AtlasIntel/Semana otorga ventaja a De la Espriella por 9 puntos (50% vs. 41,3%), mientras que la ponderación invierte el resultado dando ganador a Cepeda por 3 puntos (45% vs. 42%).

Ambos resultados se encuentran dentro del margen de error estadístico, lo que configura técnicamente un empate y hace de la segunda vuelta una contienda aún abierta. Empero, algunos analistas colombianos siguen considerando a Cepeda el candidato con mayores posibilidades de ganar el proceso en su conjunto.



La Colombia que heredará el próximo Presidente.

Quien resulte electo el 21 de junio en segunda vuelta encontrará una Colombia con algunos logros sociales como legado de Gustavo Petro, pero con retos estructurales severos. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, la tasa de pobreza cayó desde 40% en 2021 al 31,8% en 2024 —un mínimo histórico equivalente a 3,4 millones de personas salidas de la pobreza entre 2021 y 2024. El PIB creció un 2,6% en 2025, levemente por encima del promedio regional, y se ha registrado un aumento del poder adquisitivo de las clases sociales menos favorecidas.

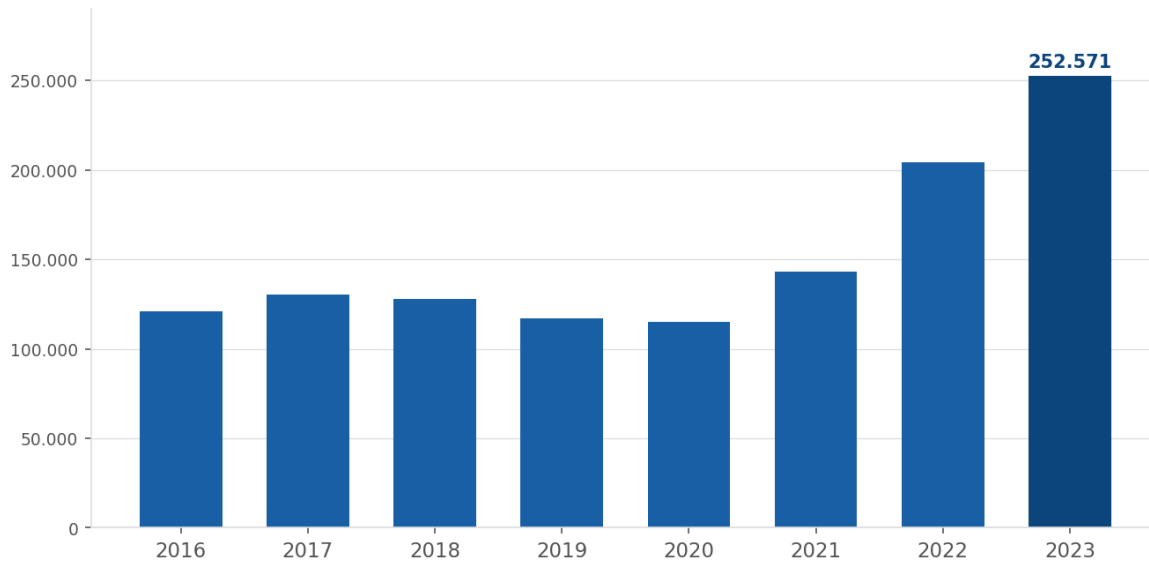
Sin embargo, estos avances coexisten con un deterioro pronunciado de los indicadores de seguridad: Colombia registró en 2025 una tasa de homicidios de 25,8 por cada 100 mil habitantes —la más alta desde 2021 y la segunda más elevada de América Latina después de Ecuador, con más de 14 mil personas asesinadas—, los grupos armados pasaron de 13.590 a 27.121 combatientes entre 2020 y 2025, y los cultivos de coca alcanzaron en 2023 su máximo histórico con 252.571 hectáreas (según datos de la UNODC). El 40,8% de los colombianos identifica el orden público como el principal problema del país (Invamer/Caracol, 2026).

Por otra parte, la crisis del sistema de salud —con ocho entidades promotoras de salud intervenidas que concentran 20 millones de pacientes— añade otro tema urgente.

Indicadores de seguridad heredados del Gobierno de Petro

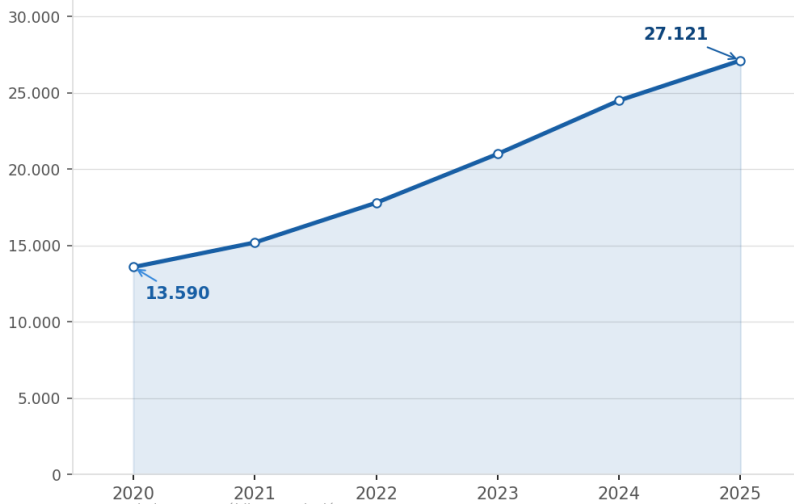
Indicador	Cifra	Contexto	Fuente
Tasa de homicidios (2025)	25,8 por 100.000 hab.	2ª más alta de América Latina (solo supera Ecuador: 50,9)	Ministerio de Defensa
Total de homicidios (2025)	+14.000	93% hombres; Valle del Cauca, Guaviare y San Andrés los más afectados	Ministerio de Defensa
Combatientes grupos armados (2025)	27.121	Duplicación en 5 años (13.590 en 2020).	Fundación CORE / Fuerza Pública
Hectáreas de coca (2023)	252.571	Máximo histórico. Descertificación EEUU en 2024	UNODC / Ministerio de Justicia
Erradicación de coca (2025)	8.051 ha.	Caída desde 103.257 ha. en 2021 bajo Duque	Dirección de Sustitución de Cultivos
Incautación de cocaína (2025)	~1 millón ton.	+47% vs. 2021. Dato más favorable del Gobierno Petro	Ministerio de Defensa
Colombianos que se sienten inseguros	46%	En su ciudad o municipio	Invamer

Los cultivos de coca están en sus máximos históricos
Hectáreas cultivadas



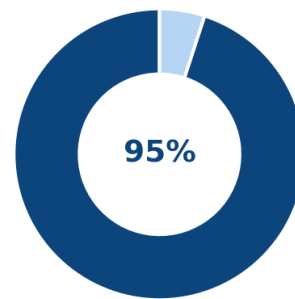
Fuente: Sistema de Información de Drogas de Colombia

Los grupos armados duplicaron sus miembros en los últimos 5 años



Fuente: Censo de la Fuerza Pública, Fundación CORE

El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC representan el 95% de los grupos armados ilegales



El nuevo tablero geopolítico regional: la extracción de Maduro y sus consecuencias.

El acontecimiento geopolítico más disruptivo del contexto regional en este ciclo electoral es, sin duda, la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 que resultó en la captura de Nicolás Maduro y la instalación de un Gobierno interino en Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez bajo tutela de la Administración Trump. Esto sin obviar el hecho que la “Operación Lanza del Sur” se convirtió en un Grupo de Tarea del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU que mantiene 5 buques desplegados en El Caribe y el Pacífico cercano a Colombia, incluyendo el USS Iwo Jima, los cruceros misilísticos USS Gettysburg y USS Lake Erie, acompañados de 4 mil efectivos y drones, los cuales han seguido hundiendo pequeñas embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico.

La extracción de Maduro —ante el cual el Presidente Petro protestó y ordenó la movilización de fuerzas de seguridad en la frontera colombo-venezolana como precaución— reconfiguró radicalmente el tablero sobre el que operará el próximo gobierno colombiano. Ya no se trata de gestionar un gobierno autoritario en Venezuela con el cual Colombia tiene asuntos que negociar pragmáticamente o mantener distancia crítica según su conveniencia, sino de relacionarse con un gobierno interno con legitimidad disputada y sometido al tutelaje externo.

Por otra parte, la extracción de Maduro como aplicación del “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe y la iniciativa de cooperación en materia de seguridad “Escudo de las Américas”, suponen el regreso de la concepción de América Latina y El Caribe como área de influencia de EEUU, lo que introduce un importante condicionamiento externo para Colombia.

Esta nueva realidad tiene implicaciones directas para los tres candidatos. Para Cepeda, la operación del 3 de enero representa una violación del Derecho Internacional que rechaza frontalmente, lo que lo posiciona en tensión estructural con Washington en relación a su propuesta autonómica y respecto a Venezuela en lo particular. Para De la Espriella, que celebró explícitamente la captura de Maduro, el nuevo escenario es una oportunidad para alinearse plenamente con la estrategia de diseñada para la región desde Washington, y puede apelar al Departamento de Estado para gestionar asuntos con Caracas. Para Valencia, representa un escenario a manejar con pragmatismo, manteniendo buenas relaciones con EEUU en el contexto hemisférico y las fuerzas de oposición venezolanas para impulsar la reinstitucionalización y recuperación económica del país, siendo el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez una etapa transitoria dentro de un proceso más amplio cuyo desenlace democrático es la condición de cualquier normalización bilateral.

El legado de Petro en política exterior: entre el activismo y el aislamiento.

Gustavo Petro legará a su sucesor una política exterior marcada por un activismo declarativo de alto perfil y una desconexión regional creciente. Los logros son reconocibles: el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela en 2022, la reactivación del comercio bilateral —que alcanzó 1.170 millones de dólares en 2025 con proyecciones de 1.600 millones para 2026—, la apertura hacia la agenda climática como vector de política exterior, y el mantenimiento de una voz propia en foros multilaterales, incluyendo el asiento

no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Colombia asumió el 2 de enero de 2026.

Sin embargo, el balance crítico de analistas especializados coincide en señalar la ausencia de una política exterior estructurada, coherente y profesionalizada. El debilitamiento de la carrera diplomática mediante nombramientos políticos y clientelistas, la ideologización creciente de la Cancillería, el fracaso de la política de la “Paz Total” como marco de negociación con grupos armados —que no produjo ninguna desmovilización y permitió que los grupos armados duplicaran sus efectivos—, y el deterioro de las relaciones con vecinos clave como Ecuador —que derivó en una guerra arancelaria con sobretasas de hasta el 100% sobre productos colombianos— configuran la herencia más problemática que el próximo gobierno colombiano deberá gestionar.

En este contexto, las propuestas de política exterior de los tres candidatos principales adolecen de una visión holística, técnica y de largo plazo. Los programas oscilan entre los lugares comunes —“política exterior de Estado”, “defensa de la soberanía”, “diversificación de socios”— y el voluntarismo ideológico, sin diagnósticos rigurosos del nuevo sistema internacional ni propuestas operacionales sobre cómo relacionarse con una Administración Trump más imprevisible en su segundo mandato. Esta limitación colectiva no impide, sin embargo, identificar diferencias sustantivas entre los candidatos que tendrán consecuencias reales sobre la inserción internacional de Colombia en el período 2026-2030.

Aprobación presidencial de Gustavo Petro — Mayo 2026

Posición	Porcentaje
Desaprueba la gestión de Petro	56,7%
Aprueba la gestión de Petro	41,0%
No sabe / No responde	2,3%

Fuente: Encuesta AtlasIntel/Semana, mayo 2026.

IVÁN CEPEDA

Pacto Histórico — Colombia Humana | Izquierda



63 años. Abogado y político. Hijo de Manuel Cepeda Vargas, Senador del Partido Comunista asesinado en 1994 por fuerzas del Estado vinculadas a paramilitares. Activista de Derechos Humanos durante décadas. Elegido al Congreso en 2009, Senador desde 2014. Figura prominente de la izquierda colombiana y de las negociaciones de paz con las FARC-EP. Conocido por su rol en la acusación al Ex-Presidente Álvaro Uribe por vínculos con el paramilitarismo.

Fórmula vicepresidencial: Aida Quilcué, líder indígena del Cauca y defensora de Derechos Humanos.

Ideología: Izquierda. Continuismo con el Gobierno de Petro.

► POST-CONFLICTO, PAZ TOTAL Y NARCOTRÁFICO

Cepeda representa la posición de mayor continuidad con la “Paz Total” del gobierno saliente. Plantea la implementación rigurosa del Acuerdo Final de Paz de 2016 como compromiso de Estado, priorizando la reforma rural integral, la protección a líderes sociales y firmantes, y los pactos regionales de transformación territorial en regiones críticas como Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo. Propone un “acuerdo nacional” amplio que incluya a sectores en contradicción —campesinos y terratenientes, empresarios y trabajadores— y busca salidas negociadas con los grupos armados que persisten, aunque señala que no negociaría con grupos que atenten contra líderes sociales.

En materia de seguridad, su propuesta se articula bajo el concepto de “Seguridad Humana”: la seguridad es sostenible sólo si se contrarrestan las causas sociales de la violencia, particularmente la pobreza y la desigualdad. La estrategia descansa en el diálogo permanente entre la Fuerza Pública y las comunidades, con participación ciudadana en los consejos de seguridad locales. Contempla el fortalecimiento del cuerpo de infantería de marina para recuperar el control de los ríos, capacidades de inteligencia ambiental para

detectar deforestación y minería ilegal, y políticas de prevención del reclutamiento juvenil como principal motor del homicidio en el país.

Sobre narcotráfico, apuesta por la sustitución voluntaria de cultivos acompañada de inversión social y fortalecimiento de economías campesinas. Propone llevar al Congreso la legalización regulada del cannabis y de la hoja de coca para usos industriales, con transferencia del control del mercado desde las mafias al Estado. La lucha contra las drogas, a su juicio, debe estar guiada por la co-responsabilidad entre países productores y consumidores, y requiere un cambio de política en Colombia donde el debate entre erradicación y legalización está “politizado”. La lucha debe hacerse “con política social: las zonas con cultivos son pobres, hay que quitarle la población a la mafia”.

El programa de Cepeda en seguridad representa la propuesta conceptualmente más elaborada en cuanto a causas estructurales de la violencia, pero enfrenta el obstáculo de los datos: los grupos armados duplicaron sus miembros durante el Gobierno de Petro bajo una política análoga de negociación y atención social. La pregunta de viabilidad operacional —cómo traducir el diagnóstico estructural en resultados verificables en el corto plazo— permanece sin respuesta suficiente en su programa.

► POLÍTICA EXTERIOR GENERAL

La política exterior de Cepeda busca la continuidad con la desarrollada por Petro, aunque matizando el tono confrontacional que caracterizó los primeros años del gobierno saliente. En el acto de adhesión del Ex-Canciller Luis Gilberto Murillo, Cepeda precisó que Colombia “no es un país vasallo, ni dependiente, ni colonia, ni que se somete al imperio de cualquier potencia extranjera” y exigió “que Colombia debe ser tratada como una nación soberana y digna, independiente”, aunque matizó que esa postura debe expresarse “sin arrogancia”. Esta formulación es la traducción retórica de una posición de “autonomía heterodoxa”, caracterizada por la equidistancia entre la subordinación y la sumisión a Washington.

En términos de alianzas internacionales, Cepeda se ha sumado durante la campaña a la red progresista latino-europea: visitó al Presidente Lula en Brasilia (marzo), a la Presidenta Sheinbaum en Ciudad de México (abril) y al Presidente del gobierno español Sánchez en Madrid (enero), además de la adhesión de su jefa de debate, la Senadora María José Pizarro, a la cumbre progresista de Barcelona convocada por Sánchez y Lula. Esta red no es sólo un aval electoral sino el embrión de un equilibrio diplomático a la Administración Trump que Cepeda busca imprimir a la política exterior colombiana.

La visión de Cepeda en materia de política exterior privilegia el multilateralismo, el Derecho Internacional y la defensa de los Derechos Humanos como marco normativo. Propone la integración regional latinoamericana, la reactivación de CELAC y mecanismos de concertación política, y la diversificación de relaciones hacia Asia-Pacífico, sin subordinarla al enfrentamiento comercial Washington-Beijing. Ha condenado la destrucción de Gaza que al igual que Petro ha calificado como “genocidio”, postura que —aunque legítima en el

debate normativo internacional— generaría tensiones con socios comerciales y diplomáticos clave y puede considerarse un indicador de la disposición de Cepeda a favorecer posiciones ideológicas.

Sobre la reforma institucional de la Cancillería, no ha enunciado posición explícita, aunque podemos presumir la continuidad con la tendencia del gobierno Petro hacia la ideologización y el clientelismo en los nombramientos diplomáticos. La adhesión de Murillo —Ex-Canciller y Ex-Embajador en EEUU con credenciales técnicas reconocidas— podría matizar esta tendencia si se traduce en responsabilidades de gestión en un eventual gobierno.

Respecto a la controversia con Nicaragua por el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyas decisiones de fondo son esperables durante el próximo cuatrienio, Cepeda desarrollaría una actitud proactiva de defensa de los intereses territoriales a través de una política de Estado que impida la pérdida y fragmentación del territorio, en continuidad con la postura de los gobiernos anteriores.

► VENEZUELA Y RELACIONES BILATERALES

La posición de Cepeda frente a Venezuela es la más consistente con el legado de Petro y la más problemática desde la perspectiva del nuevo escenario post-Maduro. Se opone radicalmente a cualquier intento de intervención militar extranjera en Venezuela y al involucramiento de Colombia en proyectos bélicos transnacionales contra el país vecino. En la misma línea, defiende la región latinoamericana como “zona de paz” y rechaza explícitamente lo que denomina “agresiones políticas y económicas” de la Administración Trump contra Venezuela.

Cepeda reconoce a Delcy Rodríguez como Presidenta Encargada y mantendría relaciones diplomáticas plenas con el gobierno interino venezolano, pero en directa contradicción con la tutela estadounidense. Esta postura puede generar tensión estructural con Washington y cierto aislamiento de Colombia en el Hemisferio Occidental, aunque puede alinearse con la red Lula-Sheinbaum-Sánchez en el contexto más amplio —aunque en España las elecciones se asoman en el horizonte.

En términos económicos, Cepeda se compromete a fortalecer el comercio en la frontera para impulsar la creación de nuevos empleos y desarrollo regional, lo que implica la continuidad de la reactivación comercial iniciada por Petro —el comercio bilateral se ubicó en 1.170 millones de dólares en 2025, con meta de 1.600 millones en 2026— y posiblemente la conclusión de acuerdos energéticos pendientes como la compra de gas venezolano y la interconexión eléctrica formalizada el 24 de abril de 2026. El expediente de Monómeros —filial de Pequiven con riesgo de insolvencia— recibirá atención prioritaria en términos favorables a la continuidad de la empresa en Colombia.

Sobre la crisis migratoria, propone políticas de atención humanitaria integral, regularización flexible y protección de derechos de los migrantes venezolanos. Colombia alberga actualmente 2,8 millones de venezolanos —el mayor del Mundo, aunque muchos poseen doble nacionalidad. No obstante, los flujos se han ralentizado desde 2024 y Colombia ha devenido más un territorio de tránsito que de destino final.

La activación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como marco de exigibilidad frente a Venezuela, propuesta en su agenda, implicaría un mecanismo multilateral de presión indirecta a largo plazo.

La posición de Cepeda sobre Venezuela es la que más directamente protege los intereses comerciales y de política de vecindad de Colombia en el corto plazo, pero genera el mayor costo en términos de relación con Washington. La paradoja estructural es que una Colombia con continuidad petrista podría ser uno de los pocos interlocutores en la región que pueden resultar cercanos y fiables para el Gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, lo que le otorgaría influencia real sobre la situación venezolana —pero a un costo diplomático potencialmente elevado con EEUU y con baja interlocución con las fuerzas de oposición venezolanas aunque con posible articulación con figuras moderadas como Enrique Márquez.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

Defensores de la Patria | Derecha populista



55 años. Abogado penalista y empresario. Conocido popularmente como “El Tigre”. Reconocido en Colombia por la defensa de clientes de alto perfil, incluyendo a Álex Saab, el empresario colombo-venezolano y aliado de Maduro recientemente deportado a EEUU. Lanzó su candidatura presidencial hace dos años, sin trayectoria política formal previa. Se mueve con destreza en redes sociales, especialmente TikTok. Defensor de la libre empresa y la familia tradicional. Miembro del Foro de Madrid que aglutina a partidos de ultra-derecha como Vox y admirador declarado de Nayib Bukele, Donald Trump y Javier Milei.

Fórmula vicepresidencial: José Manuel Restrepo, exministro y exrector universitario.

Ideología: Derecha populista.

► POST-CONFLICTO, PAZ TOTAL Y NARCOTRÁFICO

De la Espriella propone terminar de manera inmediata la “Paz Total” instaurada por el gobierno Petro y sustituirla por una política de “Seguridad Implacable”. La fórmula que sintetiza su posición —“la paz no se negocia”— tiene resonancias directas con el lenguaje de seguridad de la Era Uribe y del modelo Bukele en El Salvador. Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considera que debe ser suprimida al tener sesgo ideológico y reemplazada por la justicia ordinaria. Sin embargo, eliminar la JEP podría requerir una reforma constitucional, lo cual le enfrentaría a la Corte Constitucional, mientras que desconocer el Acuerdo refrendado podría exponer al país a la Corte Penal Internacional, haciendo la propuesta de complicada ejecución.

Su estrategia de seguridad descansa en cuatro pilares: la incorporación masiva de tecnología articulada en un Hub Regional de Inteligencia Artificial integrado con los Puestos de Mando Unificado; una ofensiva militar y policial permanente enfocada en la captura o baja de cabecillas de alto valor; la creación de un bloque de búsqueda especializado contra la extorsión; y un plan de choque para lograr el control territorial en 90 días. Este último

objetivo, no resulta probable en 90 días y es de difícil consecución incluso en cuatro años. La propuesta de crear diez mega-prisiones al estilo del CECOT de Bukele completa un perfil de seguridad de extraordinaria dureza retórica cuya viabilidad práctica genera dudas entre analistas especializados.

En narcotráfico, se compromete a destruir 330 mil hectáreas de coca, lo que implica el regreso de la fumigación aérea —prohibida con glifosato desde 2015— y un Plan Colombia 2.0 con cooperación estadounidense. Propone “bombardear narcocultivos y hundir lanchas que transporten cocaína” en línea con el Grupo de Tarea “Lanza del Sur” del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU. Esta retórica de mano dura que se alinea con las prioridades de la Administración Trump pero cuya viabilidad jurídica e institucional es cuestionada por expertos colombianos e internacionales.

La propuesta de seguridad de De La Espriella es la más agresiva retóricamente del campo, pero también la que acumula mayor número de cuestionamientos técnicos sobre viabilidad. El modelo Bukele es exitoso en El Salvador en un contexto geográfico, institucional y de estructura del crimen organizado radicalmente distinto al colombiano. La traslación mecánica de ese modelo a Colombia —país con conflicto armado de medio siglo, grupos con componentes políticos, y acuerdos de paz constitucionalmente protegidos— plantea desafíos de implementación que el programa no aborda.

► POLÍTICA EXTERIOR GENERAL

La política exterior de De la Espriella se articula en torno a una relación “carnal” con Washington, en clara evocación de la doctrina de plegamiento de la Argentina de Menem a EEUU en los años noventa. El candidato afirma que “la relación con Venezuela estaría mediada por EEUU” y ha dicho que “lo resuelve todo con una llamada” a la Administración Trump —frase que puede resumir la superficialidad de su propuesta de política exterior. Su alineamiento con Trump, Milei y Bukele como referentes ideológicos configura una inserción en la plataforma global de la nueva derecha populista.

Las señales concretas de este posicionamiento durante la campaña son verificables. En enero de 2026 se reunió en Madrid con Santiago Abascal de Vox y adhirió al Foro de Madrid junto a Kast y Milei. En marzo viajó a Miami donde se reunió con el Subsecretario de Estado, Christopher Landau, la congresista María Elvira Salazar y el Senador Bernie Moreno —muy afín a la derecha colombiana y enemigo declarado de Petro—, además de tomarse una foto con el nuevo Presidente de Chile, José Antonio Kast. Ha exhortado repetidamente al Presidente Trump a tomar medidas contra los criminales en Colombia y ha alertado al líder estadounidense sobre los riesgos del petrismo para la democracia colombiana.

Su propuesta de integrar a Colombia en el “Escudo de las Américas” representa la apuesta estratégica más coherente de su programa. Plantea una política antidrogas centrada en la cooperación militar con EEUU, la fumigación aérea y el “Plan Colombia 2.0”. La cooperación en seguridad sería, en definitiva, el eje vertebrador de toda su inserción internacional.

La propuesta más radical y constitucionalmente cuestionable de De la Espriella en materia de política exterior es su planteamiento de retirar a Colombia de la ONU, la OEA y la CIDH. Esto conduciría a Colombia al aislamiento internacional. Este planteamiento —que sigue el libreto MAGA de cuestionamiento de las instituciones multilaterales— contrasta agudamente con el hecho de que Colombia ocupa actualmente un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente una de las plataformas de mayor proyección internacional disponibles para el país.

En materia ambiental, De la Espriella apoya el *fracking* petrolero y la expansión del extractivismo, lo que lo distancia radicalmente de la agenda climática que el Gobierno de Petro ha comenzado a construir como vector de política exterior de Colombia y que tiene amplio respaldo en los foros multilaterales.

Sobre China, propone libre competencia y evaluación rigurosa de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (por sus siglas en inglés, BRI) en alineamiento con la política de Washington, lo que limitaría la diversificación de socios comerciales.

Respecto al contencioso con Nicaragua, adoptaría una posición de firmeza soberana con reforzamiento de la seguridad fronteriza y renovación del componente armamentístico como herramienta de disuasión.

► VENEZUELA Y RELACIONES BILATERALES

La posición de De la Espriella frente a Venezuela es la más rupturista del espectro y genera las tensiones biográficas más complejas. Celebró explícitamente la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 que resultó en la extracción de Maduro, y ha dicho que no se ve “sentado con esa plaga” en referencia a la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez. Su propuesta es que la relación bilateral con Venezuela se manejaría exclusivamente a través de la Secretaría de Estado de Washington, sin diálogo directo con Caracas, esperando a que “llegue la democracia al país vecino” para retomar cualquier tipo de relación directa. Esta formulación, en la práctica, implicaría subordinar completamente a EEUU la política colombiana hacia Venezuela, así como asumir el plan de tres fases diseñado por la Administración Trump pero sin realizar contribución alguna.

Esta postura debe leerse en el contexto de una tensión biográfica significativa: De la Espriella fue el abogado defensor de Álex Saab. Esta vinculación profesional intentó ser compensada durante la campaña mediante una llamada telefónica con María Corina Machado en abril de 2026, en un gesto de distanciamiento tardío e instrumental con el chavismo.

En términos económicos, De la Espriella dejaría en suspenso la reactivación comercial bilateral iniciada bajo el Gobierno de Petro. Su planteamiento de limitar la relación a “las finanzas y el comercio internacional, siempre a través de Washington” implicaría en la práctica el congelamiento de los canales gubernamentales directos para impulsar el comercio binacional, con lo cual el diálogo quedaría en manos de los empresarios de ambos países. Los sectores empresariales de Norte de Santander y las regiones fronterizas —que presionan por la consolidación de esa reapertura— han recibido con preocupación esta postura. El expediente de Monómeros, la interconexión eléctrica y la compra de gas venezolano quedarían también en una pausa indefinida.

Un error central en la propuesta de De la Espriella es que desconoce la importancia de la dimensión comercial de la relación con Venezuela, que históricamente alcanzó una balanza cercana a los 8 mil millones de dólares, con exportaciones colombianas de valor agregado. Reducir la agenda bilateral a seguridad y narcotráfico mediados por Washington, es una postura que no favorece ni a los intereses nacionales de Colombia ni al fortalecimiento de una agenda constructiva entre ambos países.

El escenario Rodríguez-De la Espriella— sería el de mayor conflictividad en la historia reciente de las relaciones bilaterales, similar al período 2019-2022 de ruptura durante el Gobierno de Duque, aunque contenida por Washington. La subordinación de la agenda bilateral a Washington implica que Colombia perdería capacidad de influencia propia sobre la situación venezolana, cediéndola completamente a EE.UU.

PALOMA VALENCIA

Centro Democrático | Derecha conservadora tradicional — Uribismo



48 años. Abogada y política. Nieta del Ex-Presidente Guillermo León Valencia e hija del Senador Álvaro Valencia Tovar. Senadora desde 2014. Candidata presidencial por el Centro Democrático, partido del Ex-Presidente Álvaro Uribe. Se define a sí misma como “100% uribista”. Sorprendió con un resultado contundente en la consulta conservadora de marzo de 2026, movilizandando más de tres millones de votos. Es una crítica del Acuerdo de Paz de 2016 y de la “Paz Total” del Gobierno de Petro.

Fórmula vicepresidencial: Juan Daniel Oviedo, Ex-Director del DANE y figura técnica reconocida.

Ideología: Derecha conservadora tradicional. Uribismo.

► POST-CONFLICTO, PAZ TOTAL Y NARCOTRÁFICO

Valencia propone derogar la “Paz Total” y sustituirla por una política de “Seguridad Total”. Aunque ha propuesto en el pasado eliminar la JEP, su acuerdo con la fórmula vicepresidencial Oviedo moderó esa postura: ya no lo propone formalmente. Reconoce los Acuerdos de Paz de 2016, cuya protección constitucional para los firmantes no puede ser eliminada, pero mantiene una posición crítica hacia su implementación. Los procesos de negociación con grupos armados en curso se acabarían, independientemente de sus particularidades.

Su propuesta de seguridad se articula bajo el lema “Vivir sin Miedo” y cuatro ejes conocidos como las 4R: reducir los ingresos de los ilegales mediante inteligencia financiera y extinción de dominio; robustecer la Fuerza Pública con tecnología avanzada, seguridad jurídica y un “Plan Colombia 2.0”; ayudar a las comunidades locales con acciones cívico-militares y asociaciones productivas; y restablecer la legalidad con presencia institucional plena en el

territorio. Propone incorporar 60 mil nuevos militares y policías, y aumentar el presupuesto de defensa al 4% del PIB.

En materia de narcotráfico, plantea la sustitución obligatoria de cultivos ilícitos con alternativas productivas reales, la reactivación de la fumigación aérea y una política antidrogas centrada en la incautación y el control de precursores químicos. La propuesta es menos maximalista que la de De la Espriella en términos retóricos, pero igualmente dura en su diagnóstico sobre el fracaso de la sustitución voluntaria. El “Plan Colombia 2.0” como marco de cooperación con Washington introduce el mismo riesgo de subordinación de la agenda antinarcóticos a las prioridades estadounidenses, lo cual puede resultar problemático para la autonomía colombiana.

Valencia representa el regreso más directo del modelo de “seguridad democrática” uribista de los años 2002-2010, actualizado a las nuevas realidades regionales. Su propuesta es más técnicamente elaborada que la de De la Espriella —que oscila entre el populismo de redes sociales y la retórica de mano dura— y más coherente institucionalmente. La elección de Oviedo como fórmula vicepresidencial refuerza la credibilidad técnica.

► POLÍTICA EXTERIOR GENERAL

La propuesta de política exterior de Valencia se articula bajo el concepto de “Diplomacia Comercial de Resultados”, que tiene cierto mérito retórico pero que reduce peligrosamente la función diplomática a su dimensión mercantil. Su idea más concreta y bien recibida es la reconceptualización del cargo de Embajador no solo como diplomático sino como promotor comercial, operador político, gestor de crisis e interlocutor jurídico.

Valencia propone la integración de Colombia en la iniciativa de cooperación en materia de seguridad “Escudo de las Américas” de la Administración Trump para combatir el narcotráfico con respaldo tecnológico y de entrenamiento, pero con una salvaguarda significativa respecto a De la Espriella: mantiene la soberanía operativa de las fuerzas de seguridad colombianas en los acuerdos de cooperación que logren firmarse. Esta distinción no es menor: implica que Valencia acepta la cooperación pero no la subordinación, lo que la diferencia del vasallaje implícito en la formulación de De la Espriella de canalizar todo a través de Washington.

En cuanto a las relaciones con China, propone un comercio bajo los principios de libre competencia con evaluación rigurosa de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (por sus siglas en inglés, BRI), en alineamiento con la postura de Washington sin adoptarla acríticamente. Sobre la diversificación de socios comerciales, propone un modelo de diplomacia comercial y económica con resultados medibles, aunque sin mencionar las fuentes de financiamiento para las iniciativas más ambiciosas. Su fórmula vicepresidencial Oviedo ha sugerido que la dimensión de datos y evidencia empírica tendrá mayor peso en la gestión de gobierno que en las otras opciones.

Valencia es la candidata que menos ha aprovechado las relaciones internacionales forjadas por su mentor político, Álvaro Uribe, durante la campaña. No ha salido de Colombia desde su nominación en marzo de 2026. El trabajo diplomático ha sido delegado: Fabio Andrade, Director internacional del Centro Democrático radicado en Miami, ha gestionado la relación con la comunidad colombiana del Sur de Florida —donde hay más de 166 mil colombianos habilitados para votar— y con el Secretario de Estado Marco Rubio. Una delegación legislativa del Centro Democrático viajó a Washington para reunirse con el Senador Bernie Moreno, quien anunció su presencia como observador internacional en la primera vuelta.

En materia ambiental, Valencia se centra en la Amazonía, la deforestación y la seguridad ambiental, con una postura más equilibrada que De la Espriella respecto al extractivismo.

Sobre la carrera diplomática, apoya una Cancillería profesional con énfasis en la “defensa de los intereses nacionales”, aunque los analistas señalan que no ha formulado una posición suficientemente detallada sobre cómo revertir el deterioro institucional heredado del Gobierno de Petro.

► VENEZUELA Y RELACIONES BILATERALES

Valencia es la candidata que más claramente articula una propuesta de política activa hacia Venezuela —en contraste con el congelamiento propuesto por De la Espriella— aunque desde una posición de pleno rechazo al gobierno interino. Asegura que se mantendría distante de Delcy Rodríguez “por ser parte del régimen de Maduro”, e indica que su lealtad por la democracia le “impide arrodillarse” ante ese gobierno venezolano. Ha mantenido comunicaciones directas con María Corina Machado —a quien describe como “una inspiración”— y se posiciona como aliada de la “reconstrucción de Venezuela”.

Esta formulación es la más claramente comprometido con una reinstitucionalización de Venezuela. Difiere de la postura de De la Espriella en que Valencia no renuncia a la interlocución con Venezuela sino que la condiciona a un proceso de democratización activamente apoyado por Colombia y “cooperación con la oposición orientada a la reconstrucción venezolana”, lo que introduce un activismo democrático que va más allá de la simple presión externa o la mera delegación en manos de EEUU.

El episodio más relevante de la campaña fue la llamada telefónica de Valencia con el Presidente ecuatoriano Daniel Noboa el 4 de mayo de 2026, el mismo día en que Ecuador anunció la reducción de la sobretasa arancelaria al 75%. Aunque la causalidad directa es discutible, Valencia lo presentó como un logro diplomático propio —“solucionar problemas para beneficiar a nuestra gente: así será nuestro gobierno”— y este episodio ilustra su disposición a ejercer activismo diplomático bilateral antes incluso de llegar al poder, una señal que los analistas colombianos consideraron como la acción de política exterior más concreta de cualquier candidato durante la campaña.

En materia de migración venezolana, Valencia parece vincular el fenómeno migratorio con la perspectiva de reconstrucción de Venezuela: si Venezuela se reconstruye democráticamente, parte del flujo migratorio podría revertirse. Esta lectura optimista, no contempla suficientemente los incentivos estructurales de permanencia en Colombia de los 2,8 millones de venezolanos ya radicados en el país ni la complejidad de cualquier proceso de retorno a gran escala.

Valencia no propone ni el reconocimiento pleno de Delcy Rodríguez (Cepeda) ni el congelamiento total mediado por Washington (De la Espriella), sino un activismo democrático con la oposición como interlocutor principal. Esto posicionaría a Colombia de manera singular en el Hemisferio: podría actuar como puente entre la agenda de transición de Washington y los actores venezolanos que buscan una salida negociada y con anclaje democrático.

CONSIDERACIONES FINALES

Tradicionalmente, la política exterior no ha tenido un papel preponderante en las campañas electorales colombianas, y la campaña de 2026 no escapa a esta tendencia. Los candidatos han aprovechado el tema de la política exterior más para hacer oposición al Gobierno de Petro que como una oportunidad de articular una visión propia del papel de Colombia en el Mundo. El “jefe de debate” de las campañas en asuntos internacionales es, en definitiva, Gustavo Petro: los candidatos se definen en relación a lo que el Presidente Petro ha hecho en estos cuatro años, y no en relación a los cambios en el sistema internacional.

Anteriores informes que ha hecho el COVRI en pasadas campañas electorales colombianas, llegaron a conclusiones análogas: la política exterior ocupa un lugar marginal en el debate electoral colombiano, los candidatos ofrecen grandes líneas pero no cursos de acción concretos para los grandes temas de la agenda, y el cálculo electoral prima sobre la reflexión seria sobre las necesidades de Colombia en materia de inserción internacional.

Las relaciones con EEUU y la crisis venezolana —la migración, la intervención estadounidense del 3 de enero y el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez— han convertido a estas relaciones bilaterales en los únicos temas de política exterior que atraviesan transversalmente toda la campaña. Con EEUU, el debate ha oscilado entre la subordinación y la autonomía estratégica; mientras que con Venezuela ha estado marcado por la polarización político-ideológica y las preocupaciones de los empresarios y los ciudadanos colombianos en zonas fronterizas.

Más allá de los déficits programáticos compartidos, las diferencias entre los tres candidatos en materia de política exterior son reales y tienen consecuencias operacionales verificables. El próximo Presidente de Colombia deberá gestionar simultáneamente: la reconfiguración regional post-extracción de Maduro; la relación con una Administración Trump que ha descertificado la lucha antinarcoóticos colombiana; la presión sobre el modelo de sustitución de cultivos ilícitos que los Acuerdos de Paz protegen constitucionalmente pero de manera precaria; el complejo expediente bilateral con Venezuela en sus dimensiones política, económica, energética, migratoria y consular; el deterioro institucional de la Cancillería; y la controversia marítima con Nicaragua, cuyas decisiones de fondo son esperables en el próximo cuatrienio.

La elección de hoy —o, más probablemente, la segunda vuelta del 21 de junio— determinará cuál de estas agendas recibe prioridad y bajo qué marco conceptual. Las diferencias son de fondo: Cepeda priorizará la autonomía y el multilateralismo Sur-Sur a costa de la relación con Washington; De la Espriella priorizará el plegamiento al Presidente Trump a costa de la agenda comercial bilateral con Venezuela y de la coherencia institucional multilateral; Valencia buscará un equilibrio entre la cooperación hemisférica en seguridad, el activismo democrático en Venezuela y la diversificación comercial.

Para Venezuela, el resultado más favorable a la estabilidad bilateral sería aquel que produzca un gobierno colombiano con capacidad real de influencia sobre el proceso de transición venezolano, independientemente de su signo ideológico. Un gobierno colombiano encabezado por Cepeda podría ejercer esa influencia como interlocutor

reconocido por el Gobierno interino de Rodríguez, pero a costa de su relación con Washington y una menor interlocución con las fuerzas de oposición venezolanas. Un gobierno colombiano encabezado por De la Espriella o Valencia podría ejercer como socio de la agenda de transición diseñada por Washington pero a costa de la relación directa con Caracas, siendo Valencia que parece tener un mayor compromiso con jugar un papel activo al respecto.

Colombia enfrenta simultáneamente la renegociación implícita de su posición en el Hemisferio Occidental, con la impredecibilidad de la Administración Trump, el desafío de Venezuela, la crisis migratoria más grande de su historia, la reconfiguración del mapa geopolítico global, así como la transición energética global que afecta directamente su economía extractiva.

MATRIZ PROSPECTIVA DE LAS RELACIONES BILATERALES

El análisis prospectivo indica que las relaciones entre Colombia y el gobierno interino venezolano de Delcy Rodríguez variarán radicalmente según el resultado electoral. Con Cepeda como Presidente de Colombia, las relaciones bilaterales estarán marcadas por el reconocimiento pleno y el mantenimiento de una agenda de cooperación pragmática que chocará con las expectativas de Washington.

Con De la Espriella o Valencia en la Casa de Nariño, estarán marcadas por la ruptura del diálogo con el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, el alineamiento con el plan de tres fases de la Administración Trump y el debilitamiento de los canales comerciales directos en el corto plazo, aunque con matices y dinámicas diferenciadas según el candidato ganador.

VENEZUELA →	Gobierno Interino Rodríguez	Gobierno Interino Rodríguez
COLOMBIA ↓	IVÁN CEPEDA	DE LA ESPRIELLA / VALENCIA
Reconocimiento del Gobierno Interino Rodríguez	Reconocimiento de Rodríguez como Presidenta Encargada. Continuidad de relaciones diplomáticas plenas.	Desconocimiento retórico del gobierno de Rodríguez por De la Espriella, “diplomacia de micrófonos” y conflictividad contenida por Washington. Relaciones diplomáticas de bajo perfil en el caso de Valencia. Espera de un desenlace democrático del plan de paz de la Administración Trump, con un papel más proactivo de Valencia.
Relación con EEUU respecto a Venezuela	Tensión estructural. Rechazo a la operación del 3-E como violación del Derecho Internacional. Acercamiento a Lula-Sheinbaum como contrapeso. Reclamo de soberanía y elecciones sin sanciones en Venezuela.	Alineamiento pleno con EEUU. De la Espriella tendría un rol pasivo al delegar en la Administración Trump la resolución de la situación venezolana y asuntos bilaterales. Valencia podría jugar un rol activo con interlocución a dos bandas: cooperación con EEUU y María Corina Machado.
Agenda de seguridad fronteriza	Continuidad de cooperación bilateral. Énfasis en causas sociales del conflicto. Rechazo a la militarización.	Endurecimiento. Presión sobre Caracas para cooperación antinarcóticos, con apoyo de EEUU. Búsqueda de Plan Colombia 2.0. Participación en “Escudo de las Américas”.

Agenda comercial bilateral	Consolidación del comercio bilateral. Reactivación de la agenda energética.	Incertidumbre. Comercio subordinado a condicionantes políticos. Estancamiento probable en corto plazo.
Crisis migratoria (2,8 millones de venezolanos en Colombia)	Atención humanitaria integral. Regularización flexible. Políticas de inclusión laboral.	Mayor control fronterizo. Coordinación regional. Presión sobre Venezuela para crear condiciones de retorno.
Monómeros y energía	Decisión sobre Monómeros como prioridad urgente. Avance en interconexión eléctrica. Posible compra de gas natural venezolano.	Alta incertidumbre. El futuro de Monómeros y los acuerdos energéticos quedarían en suspenso hasta definición del marco político.
Multilateralismo regional	Reimpulso de la CELAC, mecanismos de concertación política e integración económica regional. Respaldo a plataformas regionales de izquierda. Defensa de América Latina y El Caribe como “zona de paz”.	De la Espriella: abandono de organizaciones multilaterales y plegamiento a iniciativas informales lideradas por Administración Trump. Valencia: ONU, OEA y “Escudo de las Américas”.

En conclusión, el análisis prospectivo indica que la gran fractura en política exterior no es simplemente derecha-izquierda sino, más precisamente, entre una visión de Colombia como actor autónomo con capacidad de interlocución propia con Venezuela (Cepeda) y una visión de Colombia como socio de la arquitectura de seguridad hemisférica diseñada desde Washington con Venezuela como *test* (De La Espriella con mayor conflictividad con Caracas y plegamiento hacia Washington / Valencia, con flexibilidad estratégica y un rol más activo). Esta distinción tiene consecuencias concretas no sólo para Venezuela sino para el posicionamiento de Colombia en el contexto latinoamericano y en el marco de un orden liberal internacional en erosión, donde De la Espriella sería parte del problema, Valencia intentaría ser parte de la solución y Cepeda sería un enigma contradictorio similar a Petro.

De manera que, lo que está en juego en estas elecciones no es únicamente la continuidad o el cambio de la política interna colombiana. Es la definición del rol que Colombia jugará en la reinstitucionalización y recuperación de Venezuela, en la arquitectura de seguridad hemisférica, en el debate sobre la reforma al régimen internacional de drogas, y en la reconstrucción —o deconstrucción— del multilateralismo regional y global. Para Venezuela, país desde donde observamos con singular interés estos comicios, el resultado de las urnas colombianas es política propia.